



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00352-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HÉCTOR SANTIAGO RAMÍREZ MENDOZA
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL y CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL

En el presente asunto, **HÉCTOR SANTIAGO RAMÍREZ MENDOZA** promueve demanda en contra de la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL y CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL**, con la finalidad de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Hoja de servicios No. 4-16723496 del 11 de mayo de 2015
- Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015, por la cual se reconoce y ordena el pago de cesantías definitivas a favor del demandante
- Resolución No. 5472 del 7 de julio de 2015, por la cual se reconoce y paga asignación de retiro a favor del demandante.
- Resolución No. 0364 del 14 de marzo de 2018, por la cual se reconoce y ordena el pago de indemnización por disminución de la capacidad laboral a favor del demandante.
- Oficio No. 2018423330381311 del 14 de diciembre de 2018, por medio de la cual le fue negado la modificación de la hoja de servicios No. 4-16723496
- Oficio No. 201842360409201 del 27 de septiembre de 2018, por medio del cual le fue negado la reliquidación de las cesantías definitivas e indemnización sustitutiva por disminución de la capacidad laboral
- Oficio No. 0089566-2018-89567 del 13 de septiembre de 2018, por medio del cual le fue negado la reliquidación de la asignación de retiro.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, y las documentales al plenario, este Despacho observa que no es posible en este momento dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y sus representantes.
2. **Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.**
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. **El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”**

Así mismo, el artículo 166 ibidem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Dicho precepto debe entenderse concordante con el art. 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

1. De los actos administrativos demandados.

1.1. Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015 y No. 201842360409201 del 27 de septiembre de 2018.

El apoderado de la parte demandante solicita que se declare la nulidad de un cúmulo de actos administrativos, que de conformidad con lo expuesto en el escrito de demanda, generaron una errónea liquidación de las cesantías definitiva, asignación de retiro, e indemnización por disminución de la capacidad laboral.

Una vez evaluado tanto el escrito de demanda, como las documentales aportadas al plenario, se acreditó que al señor Héctor Santiago Ramírez Mendoza, le fue reconocido el pago de cesantías definitivas, mediante **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015** (fls. 96-98).

Frente a la firmeza de los actos administrativos, como la de la **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015**, el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente:

“Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.”

A su vez, el artículo 89 de la norma señalada establece:

“Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato” (...)

Descendiendo al caso sub lite, y como ya se dijo en líneas anteriores, la parte actora pretende tanto la nulidad de la **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015**, por medio del cual le fue reconocido el pago de las cesantías definitivas, como la del **Oficio No. 201842360409201 del 27 de septiembre de 2018**, por medio del cual le fue negado la reliquidación de las cesantías definitivas e indemnización sustitutiva por disminución de la capacidad laboral

Frente a la **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015**, encuentra el Despacho, que la parte actora **no presentó objeción o recurso alguno, entendiéndose así su renuncia a tal actuación, y por tanto, la firmeza de la resolución desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer el recurso.**

Al respecto, el H. Consejo de Estado en auto proferido el 11 de febrero de 2016¹, se manifestó respecto de la fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, señalando lo siguiente:

¹ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “A” – Consejero Ponente: William Hernández Gómez – Expediente: 15001-23-33-000-2013-00408-01

“En los términos del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la fuerza ejecutoria de los actos administrativos es la capacidad de que goza la administración para hacer cumplir por sí mismo sus propios actos, es decir, que tal cumplimiento no depende de la intervención de autoridad distinta a la de la misma administración.

Debe precisarse que la pérdida de la fuerza ejecutoria hace relación a la imposibilidad de ejecutar los actos propios de la administración para cumplir lo ordenado por ella misma. En efecto, en los términos del artículo 92 ibidem, los afectados pueden oponerse a la ejecución de un acto administrativo a través de la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria, lo cual debe realizarse antes de su ejecución, o dentro del término establecido por la Ley para atacar los actos en sede judicial, siempre y cuando la situación particular no se encuentre consolidada, de lo contrario no son afectados por la decisión anulada.”

“Negrilla del Despacho”

Ahora bien, **la parte actora presentó petición el 28 de agosto de 2018 (fl.56) solicitando la reliquidación de las cesantías definitivas, y así mismo, la reliquidación de la indemnización por disminución de la capacidad laboral.**

Analizada la petición, es claro para el Despacho **que lo pretendido por la parte actora, es revivir términos con la solicitud radicada el 28 de agosto de 2018, solicitando en ella el reajuste y pago de las cesantías definitivas, que fuera reconocida mediante Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015, puesto que, como se desarrolló en líneas anteriores, el acto administrativo en comento se encuentra en firme desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, toda vez que estos no fueron interpuestos.**

En ese orden de ideas y como quiera que el demandante realmente está interesado en controvertir el acto por el cual le fueron reconocidas y pagadas las cesantías definitivas en el 2015, se considera que éste ha debido instaurar la acción correspondiente contra el o los actos en cuestión, dentro de la oportunidad procesal pertinente, atendiendo entre otros los criterios jurisprudenciales fijados por la máxima corporación de lo contencioso administrativo.

Frente a las acciones correspondientes a ejercer, encuentra el Despacho, que contra la **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015**, no figura por parte del demandante, pronunciamiento o acción alguna dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, concluyéndose así, **que frente a este acto administrativo operó el fenómeno de caducidad.**

Al respecto, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala la oportunidad en la cual se deben presentar las demandas, refiriéndose en el numeral 2º, literal d), específicamente a las de nulidad y restablecimiento del derecho, así:

“Artículo 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales."

De acuerdo a lo anterior, a partir del día siguiente a la notificación de la **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015**, el actor contaba con 4 meses para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, si bien la parte actora está atacando tanto la legalidad del acto de que reconoció y pago en su momento las cesantías definitivas, así como el del acto que niega la petición de reajuste de las mismas, su pretensión no puede ser resuelta sin determinar la legalidad del reconoció y pago las cesantías, **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015**; acto que, como se expuso anteriormente, adquirió firmeza en el mismo año de su expedición.

Recuerda el Despacho, que de acuerdo al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren², las cesantías definitivas, no configuran una prestación periódica, sino unitaria, y que aun cuando su liquidación se realice de manera anual o, excepcionalmente, al retiro del empleado, se agota al momento de la expedición del respectivo acto que las reconozca. Razón por la cual, frente a los actos administrativos que versen sobre tal prestación unitaria, deben seguirse lo preceptuado en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

Razón por la cual el Despacho, desde ya, **(A) RECHAZARÁ LA DEMANDA** respecto de los actos administrativos, **Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015 y Oficio No. 201842360409201 del 27 de septiembre de 2018**.

1.2. Resolución No. 0364 del 14 de marzo de 2018.

Ahora bien, frente a la **Resolución No. 0364 del 14 de marzo de 2018**, por la cual se reconoce y ordena el pago de indemnización por disminución de la capacidad laboral a favor del demandante, al no tratarse del reconocimiento y pago de una prestación periódica, bajo lo argumentos expuestos en líneas anteriores, **también es susceptible del fenómeno de caducidad**. Razón por la cual, habrá de surtirse lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **respecto de los 4 meses con que cuenta el interesado para controvertir dicho acto**.

Así las cosas, y si bien el acto fue expedido el 14 de marzo de 2018, y potencialmente podría predicarse la caducidad frente al mismo, no obra en el plenario, constancia de notificación y/o comunicación, en aras de identificar si sobre este operó tal fenómeno jurídico.

(B) Razón por la cual, se conminara al apoderado de la parte actora, a que allegue constancia de comunicación y/o notificación de la misma, o indique

² Consejo de estado, Providencia del nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014),

el momento en que se surtió tal diligencia. Ha de advertírsele a la parte actora, que no aportarse tal documental, no podrá admitirse la demanda respecto de dicho acto administrativo.

1.3. Hoja de servicios No. 4-16723496 del 11 de mayo de 2015.

Frente a la nulidad de las Hojas de Servicios, como es la No. 4-16723496 del 11 de mayo de 2015, el máximo órgano de lo contencioso administrativo ha establecido:

“La hoja de servicios militares es un documento previo e indispensable para la obtención de la asignación de retiro, y en esas condiciones constituye en su naturaleza un acto administrativo de trámite. (...) Es claro entonces elaboración de la hoja de servicios militares con fines prestacionales y pensionales, es una actuación administrativa previa y necesaria para que, luego de su trámite, la autoridad administrativa competente decida si el interesado tiene derecho a la asignación de retiro o a la pensión.”³

De lo anterior se colige, que las Hojas de Servicios, como actos administrativos de trámite no son susceptibles de control jurisdiccional, razón por la cual, desde ya, el Despacho **(C) RECHAZARÁ LA DEMANDA**, respecto de la **hoja servicios No. 4-16723496 del 11 de mayo de 2015**.

No obstante lo anterior, y si bien tal documental no obedece a un acto administrativo definitivo, ello no quiere decir que, en caso de incongruencias o inconformidades frente al mismo, 1) no pueda solicitarse su corrección ante la autoridad que lo expidió, y 2) que habiendo existido una negativa a la corrección y/o modificación de la hoja de servicio, frente a ese acto administrativo en que la autoridad/administración niega la solicitud, no pueda instaurarse las acciones correspondientes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como es el caso del **Oficio No. 2018423330381311 del 14 de diciembre de 2018**.

2. Del derecho de postulación.

(D) De conformidad con lo anteriormente expuesto, se conmina al apoderado judicial de la parte actora, a que modifique el poder especial conferido en aras de que concuerde con las pretensiones a subsanar, para que así quede claramente identificado el objeto para el cual fue conferido el poder.

3. De la dirección de notificaciones judiciales.

(E) De conformidad con el numeral 7º del artículo 162 del C.P.A.C.A., la demanda debe contener *“El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00657-00(2008-15)

Por tal razón, la parte actora deberá indicar el lugar y la dirección en donde el demandante, directa y efectivamente, podrá recibir notificaciones, sin que pueda ser la misma del apoderado.

Así las cosas, y en virtud de las consideraciones anteriores, la demanda presentada por el apoderado judicial del actor, no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, 1450 del 2011 y 1564 del 2012, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

R E S U E L V E

PRIMERO.- RECHAZAR LA DEMANDA respecto de la hoja servicios No. 4-16723496 del 11 de mayo de 2015, Resolución No. 1379 del 26 de agosto de 2015, y Oficio No. 201842360409201 del 27 de septiembre de 2018, por las razones expuestas.



SEGUNDO.- INADMITIR LA DEMANDA instaurada por **HÉCTOR SANTIAGO RAMÍREZ MENDOZA**, contra la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL y CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL**, por las razones expuestas en este proveído.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

CUARTO.- Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 25 DE FEBRERO DE 2020 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
 LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

